



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-002-2022-00350-01
Demandante:	Victoria Eugenia Ramírez Vélez
Demandado:	Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Reliquidación pensión de vejez, intereses moratorios

Medellín, noviembre diez (10) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E., así como el grado jurisdiccional de consulta, en los aspectos que no fueron objeto de controversia por la entidad pública demandada, respecto de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez en contra de Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-002-2022-00350-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez convocó a juicio a Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare que le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de ello, se condene a Colpensiones E.I.C.E., reconozca y pague la diferencia entre la mesada reconocida en la Resolución SUB 76753 del 16 de marzo de 2022 y la mesada reliquidada, en igual sentido, se condene al reconocimiento y pago de los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez nació el 4 de marzo de 1961, que cotizó al Sistema General de Pensiones 1502.14 semanas, por lo que solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, prestación que le fue reconocida mediante Resolución SUB 77136 del 25 de marzo de 2021, en cuantía inicial de \$7.112.439 efectiva a partir del 1º de junio de 2020.

Se narró que el 26 de agosto de 2021, la actora solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión, petición negada mediante acto administrativo SUB 337468 del 17 de diciembre de 2021, oportunidad en la cual se liquida la prestación con un IBL equivalente a \$11.177.807, que aplicada una tasa de reemplazo del 63.63% arrojó una mesada de \$7.226.949, resolución frente a la cual se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, por evidenciarse que para los periodos de abril y mayo de 2020, el empleador cotizó sobre el 3% en vigencia del Decreto 558 de 2020, disposición que fue declarada inconstitucional, debiéndose tener en cuenta igualmente, el tiempo laborado al servicio del municipio de Medellín entre el 06 de octubre de 1986 al 23 de marzo de 1987 y entre el 05 de abril de 1987 al 01 de enero de 1995.

Se agregó que mediante Resolución SUB 76753 del 16 de marzo de 2022, Colpensiones ordenó reliquidar la pensión de vejez de la actora, teniendo en cuenta 1503 semanas cotizadas, un IBL de \$11.283.110 y una tasa de reemplazo del 63.57% para una mesada pensional para el año 2020 de \$7.172.693. liquidándose un retroactivo de pensional de \$1.309.353, sin embargo, efectuado el cálculo del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, se tiene un IBL de \$12.015.224.41, al cual aplicado una tasa del 64.65%, arroja una mesada pensional equivalente a \$7.767.842.57, es decir, superior a la reconocida por Colpensiones.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada legalmente constituida, **Colpensiones E.I.C.E.** dio respuesta al libelo introductorio, señalando que no le consta los periodos cotizados por la actora y admitiendo como ciertos los hechos, conforme la prueba aportada, aclarando que el cálculo efectuado por la activa, no es un hecho, sino una pretensión, la cual deberá ser resuelta en la sentencia.

En oposición el éxito de las pretensiones, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de pagar reajuste, reliquidación y retroactivo pensional; inexistencia de la obligación; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; intereses moratorios por reliquidaciones; improcedencia de la indexación; buena fe; prescripción; compensación; excepción innominada y la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 28 de septiembre de 2023, condenó al reajuste pensional en favor de la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez y a cargo de Colpensiones, en cuantía inicial para el 1° de junio de 2020 de \$7.749.697 y que para el año 2023 asciende a \$9.408.204, con un retroactivo calculado entre el 1° de junio de 2020 y el 28 de

septiembre de 2023, de \$26.543.376, retroactivo del cual se autoriza realizar los respectivos descuentos en salud, conforme lo establece el artículo 143 de la Ley 100 de 1993; condenó a Colpensiones a cancelar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 27 de diciembre de 2021 sobre el retroactivo causado y los reajustes que en lo sucesivo se generen y hasta tanto se realice el pago correspondiente y condenó en costas a la accionada.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de **Colpensiones E.I.CE.**, interpuso recurso de apelación, señalando que revisada la carpeta pensional de la accionante se tiene que mediante Resolución SUB 76753 de marzo de 2022, la entidad reconoció la reliquidación a la demandante con un IBL de \$11.283.110 cumpliendo con los requisitos de ley, por lo cual no existen motivos de hecho o derecho que permitieran reliquidar nuevamente la prestación.

Frente a los intereses moratorios, sostiene que los mismos deben ser reconocidos y pagados cuando, una vez reconocida la pensión, no son pagadas oportunamente las mesadas, situación que no se ha presentado en el presente caso, puesto que el pago de la respectiva mesada pensional de la demandante se hizo a tiempo, no generándose así interés moratorio alguno, por lo que solicita, se revise la liquidación efectuada por el juzgado y se revoque el fallo de instancia.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión la apoderada de **Colpensiones E.I.C.E.**, reiteró lo señalado en la sustentación del recurso de alzada en relación a que la entidad reconoció la reliquidación mediante Resolución SUB 76753 de 2022, no existiendo motivos de hecho o de derecho que permita reliquidar la prestación, insistiendo en la improcedencia de los intereses moratorios, razones por las cuales solicita la revocatoria del fallo.

Por su parte, la apoderada de la **actora**, señaló que efectuado el cálculo del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y la tasa de reemplazo del artículo 10 de la Ley 797 de 2003, arroja un IBL de \$12.015.224.41, que al aplicarle tasa del 64.65% arroja una mesada equivalente a \$7.767.842, esto es, superior a la liquidada por Colpensiones, encontrándose la liquidación efectuada muy cercana a la encontrada por el despacho, por lo que solicita se confirme la sentencia, no sin antes advertir que revisada la liquidación del juzgado, se encuentra que se incurrió en un posible error aritmético, toda vez que en enero de 2016 no se incluyó el ingreso devengado por el Departamento de Antioquia.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., en los puntos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez nació el 4 de marzo de 1961, tal y como se advierte de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 15 del anexo 03 del expediente digital.
- Que Colpensiones mediante la Resolución SUB 77136 del 25 de marzo de 2017, reconoció la pensión de vejez a la pretensora, a partir del 01 de junio de 2020, con una mesada inicial de \$7.112.439, liquidada sobre 1502 semanas cotizadas, un IBL de \$11.177.807, y una tasa de reemplazo del 63.63% (págs.31 a 37 anexo 03 del expediente digital).
- Que la demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez el 26 de agosto de 2021, petición que fue resuelta negativamente mediante Resolución SUB 337468 del 17 de diciembre de 2021, véase documentos obrantes a folios 39 y 40, 45 a 51 del anexo 03 del expediente digital.
- Posteriormente, Colpensiones a través de acto administrativo SUB 76753 del 16 de marzo de 2022, resolvió revocar la Resolución SUB 337468 y dispuso reliquidar la pensión de vejez de la señora Ramírez Vélez, estableciendo la misma en cuantía de \$7.172.673 a partir del 1 de junio de 2020, para lo cual se tuvo en cuenta 1503 semanas, un IBL de \$11.283.110 y una tasa de reemplazo de 63.57%, consúltese folios 65 a 75 del anexo 03 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta proferida en el proceso de la referencia, determinándose para tal fin, si le asiste derecho a la actora a la reliquidación de la pensión de vejez en los términos indicados por el a quo?

¿Si es procedente revocar la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 impuesta a Colpensiones?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) hay lugar a la reliquidación de la pensión de vejez de la actora, toda vez que la liquidación efectuada por Colpensiones en la Resolución SUB 76753 del 2022, resulta inferior a la que le corresponde conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993; (ii) siendo procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; razón por la cual la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA, aunque MODIFICADA, en relación al valor de la mesada pensional y del retroactivo a reconocer a la demandante.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 21 de la Ley 100 de 1993, define el ingreso base de liquidación en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”

Y en cuanto al monto de la prestación económica por vejez, el artículo 34 de la misma normativa, consagra:

“El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.

2.6. CASO CONCRETO

Al descender al sub judice, advierte la Sala, que en el asunto sometido a estudio, no existe discusión en torno al status de pensionada de la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez, a quien se le definió su derecho pensional mediante Resolución SUB 77136 del 25 de marzo de 2021, revocada y modificada a través de la Resolución SUB 76753 del 16 de marzo de 2022, prestación reconocida bajo los parámetros de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, oportunidad en la cual Colpensiones encontró que IBL más favorable a la actora correspondía a \$11.283.110, al cual aplicó un porcentaje del 63.57%, para una mesada pensional de \$7.172.673 para el año 2020.

Ahora, atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Colpensiones E.I.C.E., y al grado de consulta en el cual se conoce en favor de la entidad pública, procedió este juez plural a liquidar el IBL correspondiente a los 10 últimos años de cotización de la actora, tal y como fue aplicado por la entidad accionada y como se reclama en la demanda, encontrando que el mismo corresponde a **\$11.873.852,57**, aliviando, que si bien es inferior al señalado por el a quo que fue de \$11.982.584, si resulta superior al reconocido por Colpensiones E.I.C.E., por lo que resulta claro, que hay lugar a ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la actora,

Precisa la Sala que, no es posible establecer la razón de la diferencia entre la liquidación efectuada por el juez de primer grado y la realizada por en esta oportunidad, toda vez, que no obra en el expediente la liquidación realizada por el a quo, aclarando, que este Colegiado, tuvo en cuenta para realizar la liquidación, la historia laboral aportada por Colpensiones, actualizada al 9 de mayo de 2022, archivo *GEN-REQ-IN-2022_443756_2-20220509111411.PDF* de la carpeta 015 Expediente Administrativo.

Importa anotar que en el cálculo del IBL se tiene en cuenta también el ingreso devengado por el trabajador en el Departamento de Antioquia, en el ciclo enero

de 2016, al cual hace referencia el extremo activo en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia.

En igual sentido, debe indicarse, que resulta acertada la determinación del a quo, según la cual para efectos de liquidar el IBL debe tenerse en cuenta los ciclos abril y mayo de 2020, no existiendo justificación alguna para que Colpensiones E.I.C.E. en los diferentes actos administrativos señale que los mismos no serán tenidos en cuenta, toda vez que fueron cotizados sobre el 3% en vigencia del Decreto 558 de 2020, norma que fue declarada inconstitucional, pues cualquier inconveniente que pudiera generarse a raíz del pago de la cotización por un porcentaje menor, fue superada a través de la expedición del Decreto 376 del 9 de abril de 2021, *“Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones por los periodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores y trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 2020 y en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la Honorable Corte Constitucional.”*

En efecto el artículo 2.2.3.5.2. del referido decreto dispuso:

“Pago faltante del aporte al Sistema General de Pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020. Los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes que hayan hecho uso del mecanismo contemplado en el Capítulo I del Decreto Legislativo 558 de 2020, y por ello sólo hayan aportado el 3% de la cotización al Sistema General de Pensiones correspondiente a la comisión de administración y a la cobertura de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia, contarán con 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021 para efectuar el aporte de la cotización faltante, sin que haya lugar a la causación de intereses de mora dentro de dicho plazo, tal como lo establece la sentencia C-258 de 2020, proferida por la Corte Constitucional.”

Bajo las anteriores consideraciones encuentra la Sala, que al IBL hallado en esta oportunidad, (\$11.873.852,57), debe aplicarse una tasa de reemplazo del 64.74%, atendiendo a las 1503 semanas reconocidas por Colpensiones, precisando que si bien el Juzgado indicó que el número de semanas acreditadas era de 1513, dicha

diferencia no genera ningún efecto para el caso concreto, en tanto que el incremento en la tasa de reemplazo del 1.5% en los términos del citado artículo 34 de la Ley 100 de 1993, con la modificación de la Ley 797 de 2003, opera por cada grupo de 50 semanas cotizadas.

Así las cosas, la mesada pensional que debió reconocerse a la señora Victoria Eugenia Ramírez para el año 2020, corresponde a **\$ 7.686.729**, generándose una diferencia respecto de la mesada reconocida por Colpensiones (\$7.172.673) de **\$514.056**, en este orden de ideas, Colpensiones deberá reconocer y pagar a la demandante la suma de **\$24.315.391**, por concepto de retroactivo pensional generado por el reajuste de la mesada pensional comprendido entre el **1º de junio de 2020 y el 31 de octubre de 2023**, siendo claro, que no opera el fenómeno prescriptivo respecto de ningún reajuste.

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2020	1,61%	\$ 7.172.673	\$ 7.686.729	\$ 514.056	8	\$ 4.112.448
2021	5,62%	\$ 7.288.153	\$ 7.810.485	\$ 522.332	13	\$ 6.790.320
2022	13,12%	\$ 7.697.747	\$ 8.249.435	\$ 551.687	13	\$ 7.171.936
2023		\$ 8.707.692	\$ 9.331.760	\$ 624.069	10	\$ 6.240.688
TOTAL						\$ 24.315.391

En igual sentido, Colpensiones E.I.C.E. deberá continuar reconociendo a la pretensora a partir del **1º de noviembre de 2023**, una mesada pensional en cuantía de **\$9.331.760**, sin perjuicio de los incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

Se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización deferida a Colpensiones E.I.C.E. para descontar del retroactivo pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL3130-2020, SL1019-2021)

Posición que ha sido reiterada por el órgano jurisdiccional de cierre al indicar:

“Sobre el tema debe considerarse, que de vieja data se ha sostenido que, por regla general, tales réditos proceden cuando existe retardo en el pago de las mesadas pensionales, en tanto que las entidades de seguridad social se encuentran obligadas al reconocimiento y desembolso oportuno de ellas, como lo dispone el artículo 53 de la Constitución Política.

En ese orden, como el legislador los contempló como una medida para reparar los efectos ocasionados por el pago tardío de la pensión a la que hubiere lugar y no como una sanción al deudor, su naturaleza es netamente resarcitoria (CSJ SL13388-2014 y CSJ SL7893-2015) y su imposición no está sometida a estudiar la conducta de la administradora de pensiones o si su actuar estuvo revestido de buena fe, pues solo basta con que se verifique una tardanza en el pago de las respectivas mesadas pensionales (CSJ SL10728-2016, CSJ SL662-2018 y CSJ SL1440-2018).

Sin embargo, esta Sala ha previsto una serie de eventos en los que se exceptúa el pago de los mismos, como cuando: i) se actúa en acatamiento de una disposición legal, sin poder prever futuros análisis o cambios de criterios jurisprudenciales, verbigracia, entorno a su validez o aplicación en el tiempo, como ocurre con el requisito de fidelidad (CSJ SL16390-2015 y CSJ SL2941-2016 y CSJ SL984-2019); ii) se concede la

prestación en aplicación de una nueva línea jurisprudencial (CSJ SL787-2013, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016) y, iii) existe conflictos entre eventuales beneficiarios o titulares de la prestación, que deben ser atendidos por la jurisdicción ordinaria (CSJ SL1399-2018 y CSJ SL4599-2019)” (CSJ SL3294-2022)

Respecto a la fecha desde la que se hacen exigibles, la jurisprudencia ha enfatizado de forma iterativa, que:

“Al respecto se advierte que la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses de mora no es otra que la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional (...)

... los citados intereses comienzan a causarse desde la fecha en la que empieza el retardo del pago del beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable hablar de retardo cuando se ha incumplido con el término establecido en la Ley para el reconocimiento de la prestación” (CSJ SL del 15/05/2008, radicado 33233, reiterada en la Sentencia SL1023-2021).

Y en cuanto al tiempo con el que cuenta la administradora de pensiones para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, se memora que el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, establece:

“ARTÍCULO 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses”.

De igual manera el legislador en artículo 9 de la Ley 797 de 2003, norma posterior, reiteró el término de cuatro meses que las administradoras pensionales para desatar la solicitud de pensión en sede administrativa.

Ahora bien, el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que deben estudiarse las causas que llevaron a la entidad a negar el reconocimiento de la prestación, relevando que la Corte Suprema de Justicia, ha decantado los supuestos en los cuales no son procedentes los intereses moratorios, es así como en la sentencia SL079 del 21 de enero de 2021, recordó:

“Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no son procedentes en los siguientes casos: i) Cuando se trata de prestaciones pensionales consolidadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 ii) Cuando existe incertidumbre respecto de los beneficiarios o titulares del derecho pensional, iii) Cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo, iv) Cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial, v) Cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad, vi) Cuando el pago de las mesadas pensionales no superó el término de gracia que la ley concede a la entidad que deba conceder la prestación pensional y vii) Cuando la prestación se reconoce bajo el principio de la condición más beneficiosa.”

Según se observa, en el sub lite no se presenta ninguna de las situaciones planteadas en el precedente jurisprudencial, que permita exonerar a Colpensiones del reconocimiento de intereses moratorios, razón por la cual se tornan procedente los intereses deprecados, siendo claro que hay lugar al reconocimiento de los mismos, no solo cuando existe mora en el pago de las mesadas pensionales, si no cuando se presenta un pago deficitario de las mismas, tal y como aconteció en el presente caso, postura que viene siendo sostenida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL 3130 de 2020, oportunidad en la cual sostuvo: “6. Como conclusión, la Corte encuentra suficientes razones para modificar su jurisprudencia hasta ahora vigente, y sostener que la correcta interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 permite inferir que los intereses moratorios allí consagrados proceden tanto por la falta de pago total de la mesada como por la falta de pago de alguno de sus saldos o ante reajustes ordenados judicialmente”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la pretensora solicitó la reliquidación de la pensión de vejez el 26 de agosto de 2021, se generan los intereses de mora a partir del 27 de diciembre de 2021, tal y como lo determinó el a quo, imponiéndose confirmar la providencia en este punto.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto; se fijan como agencias en derecho, en favor de la demandante la suma de \$1.160.000, que corresponde a un

(1) SMLMV, conforme a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral primero de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora Victoria Eugenia Ramírez Vélez contra Colpensiones E.I.C.E., en el sentido de indicar que el retroactivo pensional causado por reliquidación de la pensión de vejez entre el 1º de junio de 2020 y el 31 de octubre de 2023 asciende a la suma de **\$24.315.391**, y que el valor de la mesada pensional a reconocer a partir del 01 de noviembre de 2023, corresponde a la suma de **\$9.331.760**, sin perjuicio de los incrementos y descuentos de ley.

2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.


3.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E., inclúyase como agencias en derecho, la suma de \$1.160.000, que corresponde a un (1) SMLMV.

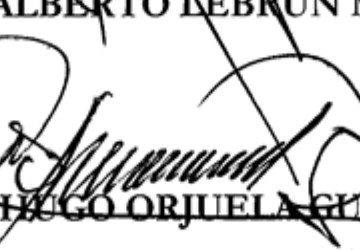
4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.


El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO